



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. reservada\*  
20 de agosto de 2010  
Español  
Original: inglés

---

### Comité de Derechos Humanos

99º período de sesiones

12 a 30 de julio de 2010

### Dictamen

#### Comunicación N° 1742/2007

<i>Presentada por:</i>	Nancy Gschwind (no representada por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	La autora
<i>Estado parte:</i>	República Checa
<i>Fecha de la comunicación:</i>	6 de noviembre de 2007 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 10 de diciembre de 2007 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	27 de julio de 2010
<i>Asunto:</i>	Discriminación en la restitución de bienes por razones de ciudadanía
<i>Cuestión de procedimiento:</i>	No agotamiento de los recursos internos
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Igualdad ante la ley; igual protección de la ley
<i>Artículo del Pacto:</i>	26
<i>Artículo del Protocolo Facultativo:</i>	5, párrafo 2 b)

El 27 de julio de 2010, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen del Comité a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación N° 1742/2007.

[Anexo]

---

\* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

## Anexo

### **Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (99º período de sesiones)**

respecto de la

#### **Comunicación N° 1742/2007\*\***

<i>Presentada por:</i>	Nancy Gschwind (no representada por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	La autora
<i>Estado parte:</i>	República Checa
<i>Fecha de la comunicación:</i>	6 de noviembre de 2007 (presentación inicial)

*El Comité de Derechos Humanos*, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Reunido* el 27 de julio de 2010,

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación N° 1742/2007, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de la Sra. Nancy Gschwind con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le ha presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado parte,

*Aprueba* el siguiente:

#### **Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo**

1. La autora de la comunicación es la Sra. Nancy Gschwind, nacida el 16 de agosto de 1939 y única heredera de los bienes de Kamil Stephan Gschwind, que falleció el 14 de abril de 2005, y que era en ese momento ciudadano de los Estados Unidos de América y ex ciudadano de Checoslovaquia. La autora se declara víctima de una violación por la República Checa del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>1</sup>. No está representada por abogado.

#### **Los hechos expuestos por la autora**

2.1 En fecha no especificada, la autora se casó con Kamil Stephan Gschwind, refugiado político de Checoslovaquia, país del que había "escapado" en 1958. El Sr. Gschwind

---

\*\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Lazhari Bouzid, Sra. Christine Chanet, Sr. Mahjoub El Haiba, Sr. Yuji Iwasawa, Sra. Helen Keller, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sra. Iulia Antoanella Motoc, Sr. Michael O'Flaherty, Sr. Rafael Rivas Posada, Sr. Fabián Omar Salvioli y Sr. Krister Thelin.

<sup>1</sup> El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 22 de febrero de 1993.

adquirió la ciudadanía estadounidense y, conforme al tratado en vigor entonces entre ambos países, perdió automáticamente la ciudadanía checoslovaca. El Sr. Gschwind heredó de su madre, la Sra. Miroslava Gschwind, la octava parte de un edificio de apartamentos situado en la calle Grafická 30, Praga 5, 150 00 República Checa. El resto del edificio fue restituido a otros miembros de la familia de la Sra. Gschwind. El Sr. Gschwind falleció el 14 de abril de 2005 dejando a la autora como única heredera.

2.2 Según una decisión de la Oficina Municipal de Praga N° 5, fechada el 24 de enero de 2001, tienen derecho a esa propiedad en virtud de la Ley N° 87/1991 los Sres. Kamil y Ota Gschwind. Sin embargo, según una carta de la Oficina Municipal de Praga N° 5 de 8 de noviembre de 2000, la ciudadanía estadounidense del Sr. Gschwind constituye un obstáculo jurídico para su reclamación de la propiedad mencionada.

2.3 El 11 de noviembre de 2002, el Tribunal Municipal de Praga N° 5 decidió que Kamil Gschwind era propietario de una octava parte del mencionado edificio. El 24 de octubre de 2003 el Tribunal de la Ciudad de Praga anuló en apelación la decisión del Tribunal Municipal y resolvió que la parte del Sr. Gschwind había quedado bajo custodia del Estado en virtud del Decreto N° 5/1945. La transferencia del derecho de propiedad se produjo en el momento en que el propietario abandonó su bien con intención de renunciar a su derecho de propiedad. El tribunal llegó a la conclusión de que el Estado había adquirido la propiedad de ese bien con arreglo a la legislación vigente en aquel momento.

2.4 La autora impugna el razonamiento del tribunal porque, según afirma, el Decreto N° 5/1945 se aplicó después de la segunda guerra mundial contra los alemanes, húngaros y ciudadanos de otros países a quienes se consideraba traidores. El Sr. Gschwind "había desertado cuando, junto con sus compañeros de la universidad, fue a examinar la arquitectura de Berlín oriental". El edificio en cuestión nunca fue abandonado y siguió siendo administrado por su tío, Jan Sammer.

2.5 El 22 de diciembre de 2005 fue desestimado un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo de la República Checa. El 15 de junio de 2006 se declaró inadmisibles una reclamación presentada al Tribunal Constitucional.

### **La denuncia**

3. La autora afirma que la República Checa ha violado los derechos que le asisten en virtud del artículo 26 del Pacto, puesto que aplica una ley de restitución de bienes que tiene carácter discriminatorio. Si su esposo hubiese huido a cualquier lugar que no fueran los Estados Unidos, no habría tenido ninguna dificultad en recuperar sus bienes. En apoyo de su afirmación cita el caso de un miembro de su familia que emigró al Canadá en 1966, no perdió su ciudadanía checa y más tarde logró recuperar sus bienes.

### **Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo**

4.1 El Estado parte formuló sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación el 6 de junio de 2008.

4.2 En relación con los hechos, el Estado parte señala que la acción incoada el 14 de mayo de 2001 ante el Tribunal del Distrito de Praga N° 5 consistía en una petición del Sr. Gschwind de que, en aplicación del artículo 126 del Código Civil, conjuntamente con el apartado c) del artículo 80 del Reglamento de Procedimiento Civil, se le declarase propietario del bien en cuestión. El Tribunal Municipal de Praga revocó en apelación el fallo del tribunal de primera instancia. Sostuvo que el Sr. Gschwind había perdido el derecho de propiedad del bien contencioso por abandono, que ese derecho había pasado al Estado y que la Ley N° 87/1991 de rehabilitación extrajudicial ofrecía la oportunidad de remediar tales situaciones; sin embargo, el Sr. Gschwind no había presentado una solicitud de restitución al amparo de esa ley sino que había entablado acción en virtud de la

normativa jurídica general. El Estado parte sostiene además que el esposo de la autora recurrió entonces al Tribunal Supremo en casación y su recurso fue rechazado por las mismas razones. La autora sometió entonces el caso al Tribunal Constitucional, que lo declaró inadmisibile el 15 de junio de 2006, por considerarlo prematuro. Un nuevo recurso constitucional de la autora fue rechazado por manifiestamente infundado el 17 de julio de 2007.

4.3 En cuanto a la admisibilidad, el Estado parte afirma que toda reclamación en relación con acontecimientos anteriores al 12 de marzo de 1991 es incompatible *ratione temporis*, ya que el Protocolo Facultativo entró en vigor después de esta fecha. Además, en la medida en que la autora denuncia una violación de la protección del derecho de propiedad de una parte de los bienes contenciosos, su comunicación es incompatible *ratione materiae* con el Pacto, puesto que el derecho de propiedad no está en sí protegido por el Pacto.

4.4 El Estado parte sostiene que la autora no ha agotado los recursos internos, ya que ni ella ni su difunto marido han iniciado el procedimiento de restitución previsto en la Ley de rehabilitación extrajudicial para obtener una decisión sobre el fondo de su reivindicación.

4.5 El Estado parte afirma que el caso es inadmisibile con arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo, porque constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones. Las actuaciones ante los tribunales nacionales concluyeron el 15 de junio de 2006 y la autora se dirigió al Comité el 6 de noviembre de 2007. Por lo tanto, como la autora no recurrió al Comité hasta casi un año y medio después de concluidas las actuaciones judiciales en el país sin dar ninguna explicación razonable, objetiva y defendible, ha hecho uso abusivo de su derecho a presentar una comunicación al Comité. El Estado parte invoca la jurisprudencia del Comité a este respecto y comparte las opiniones expresadas por el Sr. Amor en su voto disidente en el caso de *Ondrackova c. la República Checa*<sup>2</sup>. Se refiere también a una reclamación semejante presentada por la autora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A su juicio, las comunicaciones que se presentan después de haber sometido el caso a otro órgano que supervise la observancia de los derechos humanos, se deben evaluar de un modo más estricto.

4.6 En cuanto al fondo, el Estado parte impugna la afirmación de que el procedimiento judicial descrito por la autora constituye una violación de sus derechos. A su juicio, en el procedimiento se concluyó que el marido de la autora había perdido el derecho de propiedad sobre el bien en cuestión cuando emigró, que la propiedad había pasado al Estado y que a partir de 1989 el marido de la autora había tenido la posibilidad de solicitar la restitución de ese bien mediante una acción restitutoria exclusivamente y no mediante una acción declaratoria en virtud del Código Civil. Estas conclusiones corresponden perfectamente al derecho nacional. La relación entre la legislación sobre restitución de bienes y las normas del derecho civil general, según han declarado los tribunales, es un resultado lógico de la aplicación del principio de la certidumbre jurídica<sup>3</sup>. La legislación

<sup>2</sup> Comunicación N° 1533/2006, dictamen aprobado el 31 de octubre de 2007.

<sup>3</sup> El Estado parte se refiere al fallo de la Alta Sala de la División de Derecho Civil del Tribunal Supremo fechada en 11 de septiembre de 2003 en la que se afirmaba que los propietarios de un bien raíz cuyo derecho de propiedad fue asumido por el Estado durante el período decisivo (del 25 de febrero de 1948 al 1° de enero de 1990) pese a la ausencia de un fundamento legal, no podrán solicitar que se proteja su derecho de propiedad invocando el apartado 1 del artículo 126 del Código Civil, ni siquiera mediante una declaración de propiedad en virtud del apartado c) del artículo 80 del Reglamento de Procedimiento Civil, en la medida en que [se entiende que la expresión debería ser "a menos que"] haya solicitado la entrega del bien acogiéndose a la ley de restitución (rehabilitación). También se hace referencia a la opinión del pleno del Tribunal Constitucional de 1° de noviembre de 2005 según la cual no se puede utilizar una acción encaminada a la declaración de un derecho de propiedad para esquivar el significado y la finalidad de la legislación sobre la restitución de bienes.

sobre la restitución se fundaba, por una parte, en el principio de la continuidad de la validez de las leyes del pasado y, por otra parte, en la definición de criterios de igualdad de fondo y de forma en virtud de los cuales era posible impugnar ciertas leyes relativas a la propiedad mediante una acción restitutoria. Este procedimiento se estableció como único mecanismo adecuado para impugnar una relación de propiedad existente durante largo tiempo. El Estado parte afirma que en ninguna fase del procedimiento los tribunales en cuestión atribuyeron importancia alguna a la ciudadanía de la autora o de su cónyuge y no actuaron pues en modo alguno de forma arbitraria o discriminatoria.

4.7 El Estado parte alega que el hecho de que la autora y su cónyuge no hubiesen elegido el procedimiento adecuado, es decir, una petición para iniciar el procedimiento de restitución, e incoaran en cambio una acción declaratoria en virtud del Código Civil no se puede atribuir al Estado parte, tanto más cuanto que estaban representados por un abogado.

4.8 El Estado parte afirma que la autora no puede denunciar una violación puramente hipotética del Pacto que podría haberse producido si la autora o su cónyuge hubiesen presentado la solicitud en debida forma. Independientemente de la cuestión de la ciudadanía, la Ley de rehabilitación extrajudicial exigía que se cumpliesen otras condiciones previas para que prosperase la solicitud de restitución. En particular la ley fijaba un plazo, dentro del cual había que presentar la demanda de restitución contra la persona responsable, que vencía el 1º de mayo de 1995. El resultado del procedimiento también habría dependido de que la persona responsable reuniera determinadas condiciones. Según el Estado parte, es evidente, entre otras cosas, que cuando el marido de la autora entabló la acción civil el 14 de mayo de 2001 el plazo mencionado previsto en la Ley de rehabilitación extrajudicial había vencido más de seis años antes y su derecho a invocar esta ley habría expirado. Así, las exigencias legales para que se aceptase la solicitud no se habrían cumplido en el procedimiento de restitución a causa del tiempo transcurrido. Por consiguiente, no debe inferirse que los tribunales habrían denegado la petición del Sr. Gschwind exclusivamente en razón de su ciudadanía y que habrían cometido así un acto discriminatorio.

4.9 En cuanto a las cartas/memorandos de la autoridad de distrito fechadas el 8 de noviembre de 2000 y el 24 de enero de 2001 en las que se señala el obstáculo de la ciudadanía, el Estado parte dice que la opinión legal de una autoridad gubernamental, expresada además independientemente del examen de un asunto determinado, no es vinculante para terceros en derecho checo y aún menos para un tribunal independiente que estudiase la cuestión en el futuro. Por lo tanto, esta opinión es irrelevante cuando se trata de evaluar una posible violación del Pacto en un eventual procedimiento de restitución.

4.10 Por último, en relación con la denuncia de discriminación basada en que otra persona de la familia de la autora que emigró al Canadá no perdió su ciudadanía y recuperó pues sus bienes, el Estado parte alega que la autora no ha presentado información exacta al respecto. No cabe duda de que la persona en cuestión presentó su solicitud de restitución dentro del plazo previsto en la legislación aplicable, a diferencia del cónyuge de la autora.

#### **Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte**

5.1 El 21 de julio de 2008, aunque reconoce que tanto el Tribunal Municipal de Praga como el Tribunal Supremo declararon que el cónyuge de la autora debía haber iniciado su acción acogiéndose a la Ley de restitución N° 87/1991, la autora afirma que aquella era precisamente la ley discriminatoria, que descalificaba a toda persona que no tuviese la ciudadanía checa entre el 1º de abril y el 1º de octubre de 1991. Su marido no era "persona calificada" en virtud de esa ley ya que no era ciudadano checo en el período prescrito y, por lo tanto, su demanda no habría prosperado. La autora recuerda que en la decisión del Tribunal Constitucional de 6 de octubre de 1999 se establece firmemente que la exigencia de la ciudadanía para la restitución es razonable. La autora se refiere también a la Ley

Nº 289/1999, repertorio legislativo, que a su juicio permite a quienes no cumplen el requisito de ciudadanía reivindicar sus derechos acogiéndose al Código Civil.

5.2 La autora explica que la demora obedece a que su marido había iniciado otro procedimiento, en el que se le acabó denegando, por razones de ciudadanía, la indemnización prevista en la Ley Nº 261/1991 relativa a la concesión de una gratificación a los participantes en la lucha nacional de liberación durante la segunda guerra mundial y a sus huérfanos.

### **Deliberaciones del Comité**

#### *Examen de la admisibilidad*

6.1 Antes de examinar cualquier reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si dicha comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2 De conformidad con el párrafo 2 a) del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3 El Estado parte ha afirmado que la comunicación es inadmisibile, entre otras cosas, por no haberse agotado los recursos internos, ya que la autora alega una violación del artículo 26 del Pacto en relación con la Ley Nº 87/1991 sobre rehabilitación extrajudicial sin que se haya iniciado una causa acogiéndose a esta ley ante los tribunales nacionales. La autora no niega que todos los procedimientos iniciados ante las autoridades nacionales se acogieron a disposiciones legislativas diferentes: el artículo 126 del Código Civil, conjuntamente con el artículo 80 c) del Reglamento de Procedimiento Civil. Tampoco niega la autora que tanto el Tribunal Municipal de Praga como el Tribunal Supremo aconsejaron a su cónyuge que presentase una reclamación acogiéndose a la ley adecuada: la Ley Nº 87/1991.

6.4 El Comité se remite a su jurisprudencia en el sentido de que, a efectos del Protocolo Facultativo, el autor de una comunicación no necesita agotar los recursos internos cuando se sabe que estos recursos no son eficaces. El Comité observa que, a causa de los requisitos previos establecidos en la Ley Nº 87/1991, la autora no pudo reclamar la restitución en su momento porque ya no tenía la ciudadanía checa. En este contexto, el Comité observa que otros demandantes han impugnado infructuosamente la constitucionalidad de la ley en cuestión, que los dictámenes anteriores del Comité en casos semejantes permanecen incumplidos, y que a pesar de estas reclamaciones el Tribunal Constitucional confirma la constitucionalidad de la Ley de restitución de bienes. El Comité llega por tanto a la conclusión de que no quedan recursos efectivos a disposición de la autora<sup>4</sup>. Es más, el Comité considera irrelevante el argumento del Estado parte de que el Sr. Gschwind no reunía las condiciones establecidas en la Ley Nº 87/1991, dado que, según las disposiciones expresas de la ley, el Sr. Gschwind estaba excluido de entrada del plan de restitución.

6.5 En tales circunstancias, el Comité considera que las disposiciones de del párrafo 2 b) del artículo 5 del Protocolo Facultativo no impiden al Comité examinar la presente comunicación.

6.6 Por las razones expuestas, el Comité declara que la comunicación es admisible en la medida en que puede suscitar cuestiones en relación con el artículo 26 del Pacto.

---

<sup>4</sup> El Comité llegó a una conclusión similar respecto de la comunicación Nº 1497/2006, *Preiss c. la República Checa*, en el dictamen emitido el 17 de julio de 2008, párr. 6.5.

*Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

7.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información que han puesto a su disposición las partes, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2 Con respecto a la alegación de la autora de que es víctima de discriminación por el hecho de que la Ley N° 87/1991 condiciona la restitución de sus bienes a la ciudadanía checa, el Comité reitera su jurisprudencia al efecto de que no todas las diferencias de trato pueden considerarse discriminatorias en el sentido del artículo 26. Una distinción que sea compatible con las disposiciones del Pacto y se base en razones objetivas y razonables no equivale al tipo de discriminación prohibido por el artículo 26.

7.3 El Comité recuerda además sus dictámenes en los casos *Simunek, Adam, Blazek, Des Fours y Gratzinger*, entre otros, en los que consideró que se había infringido el artículo 26 del Pacto y que sería incompatible con el Pacto exigir a los autores que cumplieren la condición de la ciudadanía checa para la restitución de sus bienes o para recibir una indemnización por ellos<sup>5</sup>. El Comité considera que el principio establecido en los casos mencionados se aplica igualmente al marido de la autora de la presente comunicación y que la imposición a éste del requisito de ciudadanía establecido en la Ley N° 87/1991 violó los derechos que asisten a la autora y a su marido en virtud del artículo 26 del Pacto.

8. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que la información que tiene ante sí pone de manifiesto una violación del artículo 26 del Pacto.

9. De conformidad con el párrafo 3 a) del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, que incluya una indemnización en caso de que no puedan restituirse los bienes en cuestión. El Comité reitera que el Estado parte debería revisar su legislación y su práctica para garantizar a todas las personas la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

---

<sup>5</sup> Comunicación N° 516/1992, *Simunek c. la República Checa*, dictamen emitido el 19 de julio de 1995, párr. 11.6; comunicación N° 586/1994, *Adam c. la República Checa*, dictamen emitido el 23 de julio de 1996, párr. 12.6; comunicación N° 857/1999, *Blazek c. la República Checa*, dictamen emitido el 12 de julio de 2001, párr. 5.8; comunicación N° 747/1997, *Des Fours c. la República Checa*, dictamen emitido el 30 de octubre de 2001, párr. 8.3; comunicación N° 1463/2006, *Gratzinger c. la República Checa*, dictamen emitido el 25 de octubre de 2007, párr. 7.4; y comunicación N° 1497/2006, *Preiss c. la República Checa*, dictamen emitido el 17 de julio de 2008, párr. 7.3.